

EDITORIAL

Deuda con la discapacidad

El transporte público es mucho más que un medio para trasladarse: es la llave que permite a las personas ejercer sus derechos, acceder a la educación, al trabajo, a la salud y a la vida social. En Arica, sin embargo, esa llave en ocasiones se cierra para quienes tienen movilidad reducida.

La denuncia de Sheyla Sánchez, representante del Consejo Regional de la Discapacidad, vuelve a poner en evidencia una verdad incómoda: nuestra región está al debe en inclusión. Apenas existen algunas micros con rampas — y muchas de ellas ni siquiera funcionan —, los choferes no siempre están capacitados para utilizarlas, y los paraderos carecen de la infraestructura adecuada. El resultado es un transporte público que, lejos de ser inclusivo, se convierte en una barrera cotidiana.

El problema tiene varias aristas. En Arica, a diferencia de otras ciudades del pa-

ís, el transporte público está en manos de privados que no reciben subsidios estatales para rebajas de pasajes, explica la dirigente. En ese escenario, los usuarios en situación de discapaci-



El transporte inclusivo no puede seguir siendo un anhelo o una promesa incumplida”.

dad no solo enfrentan exclusión, sino también un costo económico adicional. Muchos deben recurrir a vehículos adaptados, pagando entre 10 y 15 mil pesos por traslado, lo que limita seriamente su autonomía y participación en la vida diaria.

A ello se suma la falta de voluntad en algunos conductores, que simplemente se niegan a detenerse o desconocen el uso de las rampas. No es solo un asunto técnico: es un tema de sensibilidad, de empatía y de respeto. Una ciudad que no garantiza accesibilidad en su transporte público niega, en los hechos, el derecho a la igualdad.

La directora regional de Senadis, Lilian Rojas, reconoce que la situación no es exclusiva de Arica, sino un problema a nivel nacional. Sin embargo, esa constatación no puede servir de excusa para mantener la inacción. El transporte inclusivo no puede seguir siendo un anhelo o una promesa incumplida. Es una obligación moral, social y legal. Mientras no se aborde con seriedad, Arica seguirá mostrando un rostro desigual: el de una ciudad que habla de inclusión, pero que en su vida diaria todavía cierra puertas a quienes más necesitan que se abran.